

Los años y perjuicios de Zapatero

Cayetana Álvarez de Toledo *

La autora, joven diputada del Partido Popular por la provincia de Madrid, analiza los años de gobierno de Rodríguez Zapatero. Se centra de manera particular en la figura, talante y estilo de hacer política de nuestro actual Presidente. Para concluir que la particular forma de ser y gobernar de Zapatero no sólo ha condicionado su lugar dentro de la historia de su partido, sino el presente y el porvenir, éstos en sentido decante, de España.

Zapatero tiene un plan

«Yo cada noche le dije a mi mujer: “Sonsoles, no te puedes imaginar la cantidad de cientos de miles de españoles que podrían gobernar”».

Toda crónica sobre los años de Zapatero al frente del Gobierno de España debería incluir esta cita de una entrevista que concedió a *El País* seis meses después de su investidura. Para unos, la frase es un alegato de humildad; para otros, tiene el brillo inextinguible de las grandes confesiones: José Luis Rodríguez Zapatero no sólo no estaba preparado para asumir la inmensa responsabilidad de

* Diputada por el Partido Popular por la provincia de Madrid.

presidir el Gobierno de España, sino que además lo sabía.

El debate sobre la ineptitud de Zapatero ha sido una constante a lo largo de su mandato. Su punto álgido fue el insulto, más sincero que irónico, que le dirigió el líder de la Oposición, exasperado por la grandilocuente inanidad de su rival: «¡Bobo solemne!». A la luz de los hechos, muchos socialistas que entonces reaccionaron con furiosos aspavientos y se rasgaron públicamente las vestiduras en defensa de la dignidad ofendida de su líder, estarían hoy dispuestos a reconocer que Mariano Rajoy tenía razón. Y, sin embargo, sería un error reducir el desolador balance del Gobierno de Zapatero a un problema de insolvencia o mala gestión. El tiempo también ha demostrado que se equivocaban quienes pensaban que aquel joven líder socialista, con nula experiencia en la administración pública, que había llegado a La Moncloa contra todo pronóstico, tras el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, carecía de un proyecto político.

Zapatero es un político oportunista, pragmático y sinuoso. Pero, además, tenía un plan. Un plan que explica toda su acción política: las banderas que enarbó, las prioridades que escogió, las leyes que promovió y las reformas que

impulsó. No era un plan de país, sino un plan puramente partidista, un plan de poder: consistía en convertir las dos legislaturas de Gobierno del PP en una anomalía, en un brevísimo paréntesis dentro de un largo ciclo de hegemonía socialista. Bajo la premisa convertida en eslogan de que «el PSOE es el partido que más se parece a España», Zapatero pretendía que también fuese el único partido capaz de gobernar en España. Es decir, acabar con la alternancia democrática.

Para ello, Zapatero avanza en varias direcciones. Por una parte, intenta convertir al principal adversario del PSOE en un partido marginal, cercado por un cordón sanitario: el implacable «todos contra el PP». Simultáneamente, genera debates de enorme sensibilidad social para dividir al PP entre un centro blando y acomodaticio, y una derecha dura y recalcitrante, una maniobra que, de prosperar, habría supuesto la implosión del Partido Popular y su inhabilitación como alternativa. Por último, forja una poderosa alianza de intereses con la izquierda más radical y los separatistas, que le asegura la permanencia en el poder a costa de socavar los propios fundamentos del régimen constitucional. Según el director de un influyente periódico nacio-

nal, Zapatero pasará a la historia como el presidente del Gobierno «más equivocado, pero el más demócrata». Es un diagnóstico injusto con todos sus predecesores. Zapatero ha sido el presidente más equivocado de la historia reciente de España, y el que peor ha entendido y menos ha respetado los principios esenciales de la democracia.

Hoy, siete años después de su advenimiento político, parece evidente que Zapatero ha fracasado. El descalabro electoral del pasado 22 de mayo ha sumido al Partido Socialista en una profunda crisis orgánica e ideológica de la que tardará tiempo en salir. Sin embargo, ni el descrédito del socialismo ni las perspectivas de una próxima victoria del PP a nivel nacional cancelan los enormes perjuicios causados estos años. Las políticas de Zapatero han tenido gravísimas consecuencias, no sólo coyunturales, sino también de carácter estructural. La herencia de Zapatero es una España arruinada, un Estado anémico y el regreso de ETA a las instituciones, con más fuerza y poder político que nunca.

Divide y vencerás

Muchos españoles se preguntan ahora: ¿cómo hemos llegado hasta

aquí? Para entender el retroceso sufrido por España en los últimos siete años hay que analizar los dos grandes ejes que articulan el proyecto ideológico de Zapatero: el relativismo y el revanchismo.

La tergiversación de las palabras, de los conceptos, de la propia verdad, es una de las características fundamentales del 'zapaterismo'. El concepto de 'nación' se vuelve «discutido y discutible». La palabra 'matrimonio' deja de significar lo que siempre ha significado y lo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y la Constitución dicen que significa. La democracia consiste en «tener cintura», y la justicia, en que los fiscales y magistrados ensucien sus togas con el «polvo del camino». Todo vale. Todo es posible. Todo es relativo. Depende de la óptica con que se mire. La óptica buena es la progresista, la de una izquierda posmoderna, visionaria y audaz. La óptica mala es la conservadora, la de una derecha carpetovetónica, miope y encorsetada.

El relato de Zapatero actúa como un disolvente de la realidad. Si no hay límites a lo posible, si «la libertad te hará verdadero», entonces, ¿qué valor tienen las normas, las leyes o incluso los hechos objetivos? El resultado es la pérdida total de referentes: la incapacidad de diferenciar lo que está objetiva-

mente bien de lo que está objetivamente mal; la ruptura de las reglas del juego, que varían en función de la coyuntura política o la necesidad partidista; y, lo más grave, el desprestigio de las instituciones y la erosión del Estado de Derecho.

A este relativismo que todo lo entiende y justifica en función de la ideología, se suma el revanchismo como gran elemento movilizador de la izquierda y el nacionalismo contra la derecha. El PP es estigmatizado como un partido reaccionario, anti-autonómico, machista, homófobo, xenófobo, belicoso y sometido a la tutela de los obispos. Un partido con el que no se puede pactar y al que no se debe votar, por mera higiene democrática.

Este maniqueísmo inspira algunas de las iniciativas legislativas más polémicas del mandato de Zapatero. Son las que afectan a asuntos socialmente sensibles, desde la educación y la familia hasta la libertad religiosa y la moral.

Zapatero deroga la Ley de la calidad de la educación, aprobada en 2002, y la sustituye por un remedo de la vieja LOGSE, con una única novedad relevante: la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Bajo esta rúbrica irrefutable se esconde un instrumento de adoctrinamiento ideológico con el que el

Estado se arroga el derecho a intervenir en la formación moral de los niños, en contra de la libertad que la propia Constitución reconoce a los padres para escoger la educación de sus hijos. Algunos manuales de EpC parecen redactados por altos cargos del Partido Socialista con la misión de producir futuras generaciones de votantes: jóvenes progresistas, laicistas, multiculturales y antiliberales, partidarios de la alianza de las civilizaciones y dispuestos a rendirse preventivamente en aras de la paz universal.

A la ideologización de la educación se suma la aplicación sistemática de la clásica fórmula del 'divide y vencerás' en el terreno de la ingeniería social. Bajo el pretexto de promover los hábilmente bautizados como «nuevos derechos», el Gobierno consigue aprobar una serie de iniciativas legislativas cuyo objetivo no es la extensión de derechos, sino la demonización de la derecha.

La primera de estas iniciativas es la Ley del matrimonio homosexual, aprobada en julio de 2005. El Gobierno podría haber promovido una Ley de uniones civiles en la línea de las consensuadas en países como Francia, Alemania o el Reino Unido, que habría contado con el respaldo del primer partido de la Oposición. Sin embargo,

apuesta por una opción más drástica, objetivamente minoritaria, que genera una gran tensión política y social. No busca el consenso. Lo que persigue es un enfrentamiento entre izquierda y derecha, y una fractura interna en el PP.

Lo mismo ocurre con la reforma de la Ley del aborto, aprobada el 3 de marzo de 2010. El Gobierno llega al extremo de autorizar el aborto a partir de los 16 años sin el conocimiento, ni por supuesto el consentimiento, de los padres o tutores. Es una medida radical, cuestionada incluso por destacados dirigentes del PSOE, con la que el Gobierno busca engordar y estirar el famoso lema acuñado por Zapatero en el macro-mitín de celebración de su primer año en el poder: «Ocho años de derechas; uno de derechos». La prueba es que la ampliación de la Ley del aborto no figura en ninguno de los programas electorales del PSOE. El Gobierno improvisa la reforma a principios de 2010 para generar un fuerte debate ideológico que restituya las fronteras ideológicas, desfiguradas por los devastadores efectos de la crisis económica. Maniobra que el Gobierno repite en vísperas de las elecciones del pasado 22 de mayo, con el anuncio de la presentación inminente de un proyecto de Ley de muerte digna. Pero la noticia apenas suscita

debate o interés. Es recibida como lo que es: el epitafio del 'zapaterismo', de una determinada forma de hacer política que no duda en dinamitar los consensos más delicados, los que más generosidad y esfuerzo ha costado forjar, en aras de la estigmatización política y social del adversario.

Esta política alcanza su máxima expresión en una de las iniciativas legislativas más corrosivas de la era Zapatero: la Ley de la memoria histórica, un ataque directo al consenso fundacional de nuestro régimen democrático –la Transición.

La impugnación de la Transición

El 15 de abril de 2004, el Congreso de los Diputados abre sus puertas para la celebración de la sesión de investidura del nuevo presidente del Gobierno. Diputados nuevos y veteranos, periodistas e invitados, se amontonan en las tribunas y los escaños para escuchar al joven ganador de las elecciones. El estupor es generalizado: José Luis Rodríguez Zapatero concluye la intervención más importante de su vida con una cita del testamento de su abuelo, el capitán Juan Rodríguez Lozano, fusilado por las tropas franquistas durante la Guerra Civil.

La evocación no había sido fortuita. Unos meses después, Zapatero insistía en reivindicar la figura de su abuelo como su gran referente e inspiración. Mi vocación política, explicaba en una entrevista a *El País*, «no se entiende si no se entiende la frustración que yo viví desde pequeño en mi casa, no sólo porque cuando fusilaron a mi abuelo mi padre se había quedado sin padre y mi abuela sin esposo, sino porque se habían quedado sin país». Por si quedaba alguna duda de su identificación con el bando republicano, en octubre de 2005, Zapatero declaraba a la revista *Marie Claire*: «¡Es que soy rojo! Nada me ha enseñado la derecha».

Las insistentes alusiones de Zapatero a la Guerra Civil no tienen una explicación meramente biográfica o psicológica. De hecho, responden más al pragmatismo que a una patología. Bajo gobiernos de distinto signo político y con distintas mayorías, el Parlamento español había aprobado ya más de veinte leyes y disposiciones a favor de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Todas con un amplísimo consenso. En 1999, con motivo de la aprobación de medidas en beneficio de los militares de la República, el propio Zapatero, entonces un desconocido diputado de la Oposición, había proclamado desde la

tribuna del Congreso que aquel era «el último paso», el «último resquicio» y hasta «el punto final» del proceso de restitución moral de las víctimas del bando de los vencidos.

Sin embargo, en cuanto accede al Gobierno, Zapatero decide promover una Ley de la memoria histórica que reabre las fosas literales y metafóricas del enfrentamiento más cruento de la historia de España. Lo hace por dos motivos. Primero, porque confía en el miedo a la derecha para tapar sus propios errores. Las declaraciones de dirigentes socialistas alertando contra el regreso de la «extrema derecha» o la «derecha extrema» o la «ultraderecha» o directamente los «fachas» componen una letanía defensiva que se prolonga hasta las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo, cuando Zapatero, ya desesperado, compara al PP con «la derecha de la derecha finlandesa». Y, segundo, y todavía más importante, porque la identificación del PP con el franquismo le sirve para reconstituir el frente de izquierdas y nacionalismos con el que espera perpetuarse en el poder, si no para siempre, sí por mucho, mucho tiempo.

El fantasma del franquismo es arma y escudo contra la alternancia: en la medida en que la derecha es

heredera del franquismo, no tiene legitimidad para gobernar; la única legitimidad real es la de los vencidos de la Guerra Civil y víctimas de la dictadura. Así lo expresa, sin ningún pudor, José Blanco en la última Convención socialista en Sevilla: «La democracia es incompatible con el señor Rajoy». Es un planteamiento destructivo, que consiste en movilizar a una parte del electorado y a sus representantes políticos con un objetivo común delirante: ganarle la Guerra Civil al PP. Como si el PP fuese Franco. Como si la sociedad española no hubiese protagonizado uno de los episodios más edificantes de reconciliación colectiva. En definitiva, como si la Transición no hubiese existido o, peor aún, hubiese sido un fraude.

Con la utilización política y partidista de la Guerra Civil, Zapatero rompe un consenso tácito, respetado por todos los Gobiernos desde la Transición, incluidos los presididos por Felipe González. Recoge así la evolución en el discurso de una parte de la izquierda tras la mayoría absoluta obtenida por el PP en el año 2000. Aquella victoria de José María Aznar supuso un punto de inflexión. Un año después, Felipe González y el consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, publicaban un pequeño libro titulado *El futuro no es*

lo que era, que es imprescindible para entender lo que vendría después. Ahí están, en forma de comentarios, deseos y digresiones, las líneas maestras del proyecto de Zapatero, empezando por la negación de la legitimidad democrática al PP:

JUAN LUIS CEBRIÁN: «¿No sería también de alguna manera razonable, o por lo menos táctico o brillante, por parte del PSOE tratar de firmar acuerdos también con los otros partidos? Y ya no hablo de pactos, sino simplemente de actos. Sentarse a comer con los nacionalistas, vascos, catalanes, con el bloque gallego, con IU, etc., y que se vea que la oposición, aun estando en minoría, posee todavía una legitimidad histórica respecto a la construcción de la democracia, tiene algo que decirle a ese poder absoluto de la derecha que, aunque haya sido elegida y legitimada por las urnas, todavía carece, al menos en parte, de ese otro tipo de legitimidad, por más que sus líderes piensen de otra forma».

FELIPE GONZÁLEZ: «¿No la tienen?».

JUAN LUIS CEBRIÁN: «En la medida en que no la tengan, amenazan la estabilidad democrática. La sensación que percibo es que en el PP están felices porque son la derecha de siempre, la que colaboró con la dictadura decididamente porque la engendró, pero encima legitimada democráticamente. De algún modo es como si Franco se

hubiera presentado a las elecciones y las hubiera ganado. Podemos ponerle todos los matices que queramos a esto, pero me parece que está claro lo que quiero decir. También votarían, a lo mejor, a Fidel Castro en Cuba».

Este razonamiento profundamente antidemocrático inspira el discurso y las políticas de Zapatero. Los enfrentamientos de hace setenta años recuperan protagonismo, eclipsando e incluso derogando los grandes consensos logrados hace treinta. Frente a la reconciliación, se impone la «reparación», que no es más que un eufemismo para la revancha. El propio consenso de la Transición se pone en cuestión: deja de considerarse la expresión del deseo colectivo de los españoles de cerrar las heridas del pasado y construir un futuro democrático en común, y se convierte en la imposición de un sector del Ejército y de la derecha reaccionaria sobre la izquierda y los nacionalistas. Estamos ante la impugnación de la Transición. Es decir, ante la refutación de la Constitución y del propio régimen democrático pactado en 1978.

La centrifugación del Estado

El jueves 13 de noviembre de 2003, en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas, el candi-

dato socialista a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece ante más de 16.000 militantes del PSC en el emblemático Palau Sant Jordi. Allí adquiere un compromiso solemne con uno de los dirigentes que más había contribuido a su elección como secretario general del PSOE: «Pasqual: apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña».

Pocas frases han tenido más repercusión política, jurídica y social, y han hecho más daño al régimen constitucional y a la convivencia entre españoles. Se podrá alegar que Zapatero pronunció estas palabras desde la irresponsabilidad de quien se preveía perdedor en las elecciones generales que se celebrarían unos meses después. Pero la frivolidad de un presidente inesperado no justifica un compromiso cuya finalidad última era alimentar el discurso del agravio catalán ante un previsible tercer mandato del PP. Además, Zapatero podría haber rectificado su error al llegar al poder. Pero no lo hizo. Como tampoco hizo nada para reconducir el antidemocrático Pacto del Tinell por el que socialistas y nacionalistas catalanes se comprometieron a no suscribir ningún acuerdo con el PP. Al contrario. Extendió el Tinell al conjunto del territorio nacional, selló una

alianza operativa y estratégica con los partidos más radicales del hemisferio encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña, y convirtió la reforma del Estatuto catalán en la prioridad política de su mandato.

Con la reforma del Estatuto catalán, Zapatero persigue el mismo objetivo que con la Ley de la memoria histórica, sólo que ya no se limita a jugar con los sentimientos individuales y colectivos, sino que también lo hace con el modelo de Estado. Para consolidar un proyecto de poder, todo vale, incluso provocar enfrentamientos entre territorios y socavar la unidad nacional. El plan de Zapatero consiste en crear una España tan, pero tan «plural» que en la práctica acabe siendo incompatible con un partido con vocación nacional. La centrifugación del Estado, la erosión del propio concepto de España como nación, coloca en una situación de ventaja objetiva al PSOE. Cuanto menos España, menos PP. Bajo esta premisa y sin contemplaciones, Zapatero quebranta las condiciones que él mismo había impuesto durante la sesión de su investidura para aprobar cualquier reforma estatutaria: las famosas «tres c». Ni constitucionalidad, ni consenso, ni ciudadanía, en el sentido de respaldo popular en las urnas.

El nuevo Estatuto catalán, una auténtica Constitución paralela de 223 artículos, llega al Congreso de los Diputados desde el Parlamento de Cataluña el 2 de noviembre de 2005. Con su toma en consideración, empieza un vodevil marcado por la tensión social y la deslealtad institucional y política. De espaldas a sus compañeros del PSC y al propio presidente de la Generalitat, Zapatero sella un pacto secreto con el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, para desbloquear los aspectos del Estatuto relativos a la financiación y a la definición de Cataluña como «nación». Esquerra Republicana de Cataluña, entre la pataleta y la patochada, pasa del sí, a la abstención, al no, forzando la caída del tripartito y de Maragall. El referéndum es un fiasco: con una participación de apenas el 48%, sólo el 36% de los catalanes con derecho a voto apoya el nuevo Estatuto. El Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas presentan hasta siete recursos de inconstitucionalidad contra distintos aspectos de la reforma. El Tribunal Constitucional tarda cuatro años en resolver el recurso presentado por el PP y, cuando por fin lo hace, se limita a declarar inconstitucionales catorce artículos, recurriendo al siempre equívoco y conflictivo criterio de la «interpretación» para admi-

tir el resto, incluidos los que consagran los derechos históricos de Cataluña, sus símbolos nacionales, la bilateralidad en su relación con el Estado y las competencias exclusivas de la Generalitat. El último acto de este sainete es la manifestación multitudinaria convocada en Barcelona bajo el lema «Somos una nación, tenemos el derecho a decidir», de la que el presidente de la Generalitat tiene que salir escoltado.

La imagen de José Montilla, protegido por la policía de las agresiones de un grupo de independentistas, ilustra mejor que ninguna el inmenso perjuicio causado por Zapatero. En su optimismo táctico, que no antropológico, Zapatero llegó a pronosticar que, gracias a la reforma del Estatuto de Cataluña, España viviría «un período de veinticinco o treinta años de amplia estabilidad territorial, de mayor cohesión y cooperación». El resultado es exactamente el contrario: la radicalización del independentismo, un desprestigio brutal de las instituciones y la proliferación de litigios y enfrentamientos entre los distintos territorios de España.

La deslealtad del socialismo con el régimen constitucional, su cuestionamiento del consenso de la Transición y su radicalización hacia posiciones nacionalistas, ha

trasladado el centro de gravedad de la política española hacia un extremo. El resultado es que aquellas personas y partidos que hace apenas unos años se definían como nacionalistas «moderados» hoy votan a favor de la independencia en referéndum promovidos y celebrados con total impunidad a lo largo y ancho de Cataluña. Entre ellos, el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas. Con un agravante letal para la cohesión nacional: los efectos de la reforma del Estatuto catalán no se limitan a las relaciones entre Cataluña y el Estado. La aprobación del nuevo Estatuto desata una carrera desbocada entre las demás Comunidades Autónomas en busca de más competencias y nuevos elementos de diferenciación respecto al resto de territorios y al conjunto de España cuya consecuencia es un Estado anémico, por no decir residual.

Hoy, el Estado español tiene cada vez más dificultades para realizar políticas unitarias. Las instituciones comunes están gravemente desprestigiadas. La desigualdad de derechos en función de los territorios es cada vez más clamorosa y la ineficiencia del Estado es cada vez mayor. El español es hoy un Estado débil, formado por Comunidades Autónomas cada vez más fuertes y empeñadas en seña-

lar y hacer valer sus hechos diferenciales, no sólo sociales o económicos, sino también históricos e identitarios. Sólo la profunda crisis económica que sufre España —con el riesgo de quiebra financiera de muchas administraciones— ha frenado momentáneamente la exaltación y materialización de esas diferencias. Pero, con crisis o sin ella, el daño estructural al Estado está hecho y es inmenso. Por primera vez en treinta años, la supervivencia del modelo constitucional está en duda. Sólo hay dos opciones: o se recupera mediante una reforma muy profunda o se asume su derrota.

Paz por proyecto

El 31 de mayo de 2008, Zapatero comparece sonriente y relajado ante las cámaras de la catalana TV3 y aporta una clave fundamental para entender el negro colofón de su mandato: la vuelta masiva y triunfal de ETA-Batasuna a las instituciones vascas y navarras bajo las siglas de Bildu.

«Justo en el momento culminante de la negociación del Estatuto de Cataluña, cuando ya veía cerca la luz de que íbamos a tener el Estatuto, yo estaba convencido de que llegaba lo que podría ser el principio del fin de la violencia, el principio de la esperanza del

fin. Viví esas dos situaciones como una coincidencia temporal, pero con dos actuaciones de envergadura con mucha intensidad. Por eso decía, en dos años las cosas que están cambiando y las cosas que hemos hecho».

Para Zapatero, la reforma del Estatuto catalán y la negociación con ETA eran las dos caras de una misma moneda. La reforma catalana facilitaba la negociación con ETA al establecer un camino, una pauta, un precedente. Si el concepto de nación es «discutible» y Cataluña puede ser una nación, entonces, ¿por qué no el País Vasco? Máxime teniendo en cuenta la formidable recompensa a cambio de tan insignificante concesión: nada menos que la paz.

La negociación con ETA se convierte en la gran apuesta personal de Zapatero. Es el alfiler del que cuelga todo su proyecto de poder hegemónico. Zapatero aspira a mantenerse en el poder, incluso a pasar a la historia, como el presidente del «no a la guerra» y del «sí a la paz». El ideólogo y ejecutor de esta estrategia es Alfredo Pérez Rubalcaba. Aunque no lo han reconocido públicamente, ni lo harán, lo que plantean Zapatero y Rubalcaba es un trueque de «paz por proyecto». Es decir, que ETA deje de matar a cambio de que los españoles aceptemos que ETA pueda defender libremente el pro-

yecto excluyente y totalitario por el que lleva matando cincuenta años. Es una propuesta envenenada e inaceptable. Primero porque supondría legitimar la historia criminal de ETA y convertir a las víctimas del terrorismo en daños colaterales de un conflicto político. Y, segundo, porque significaría renunciar a la condición de España como un «régimen democrático de derechos y libertades», como bien advirtió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la importantísima sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna.

La oposición del Partido Popular al pago de un precio político a ETA provoca un duro enfrentamiento en el que la izquierda y los nacionalistas acusan al PP de romper la unidad en la lucha contra el terrorismo. Como si la unidad fuese un bien en sí misma y no un medio para lograr la derrota definitiva del terrorismo. Zapatero y Rubalcaba son quienes dinamitan el consenso antiterrorista al abandonar la política de la derrota y apostar públicamente por un final dialogado de la violencia. Al hacerlo, liquidan el tercer gran acuerdo nacional de la democracia: ni espíritu de la Transición; ni consenso constitucional; ni tampoco Pacto por las libertades y contra el terrorismo.

En esta pirueta letal para el Estado de Derecho, Zapatero implica a to-

das las instituciones del Estado, empezando por el propio Parlamento. En el Debate del estado de la nación de 11 de mayo de 2005 anuncia que «el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia». Una semana más tarde, consigue que el Congreso apruebe una resolución autorizando al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo con ETA que llevaba ya en marcha al menos cinco años. La burla a la soberanía nacional culmina un año después, el 29 de junio de 2006, cuando Zapatero anuncia formalmente el inicio de las conversaciones con ETA, no en el hemiciclo del Congreso, sino en un pasillo.

Según las actas de las reuniones incautadas por la Guardia Civil a ETA y publicadas por varios medios de comunicación en abril de 2011, las negociaciones del PSOE con la organización terrorista habían comenzado allá por el año 2000 –coincidiendo, significativamente, con la firma del Pacto Antiterrorista– e incluyeron todo tipo de cesiones: la destitución del fiscal Fungairiño, el nombramiento de Rubalcaba como ministro del Interior, un chivatazo al aparato de extorsión de ETA, la promesa de indultos masivos para asesinos con delitos de sangre, el compromiso de no realizar detenciones y

de que el Tribunal Constitucional derogase la 'doctrina Parot', la ocultación de las cartas de extorsión a empresarios, la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos y la legalización de Batasuna: primero bajo las siglas del PCTV y luego como ANV, ese engendro mitad legal, mitad ilegal, que consigue más de cuarenta alcaldías y 437 concejales en las elecciones municipales de 2007.

El atentado de la T4 de Barajas, que acabó con la vida de dos personas, pudo ser un punto de inflexión: el origen de una rectificación sincera y total del Gobierno. Sobre todo dada la humillación que supuso el bombazo para Zapatero, que 24 horas antes, en una multitudinaria rueda de prensa, se había jactado de las brillantes perspectivas de la lucha contra el terrorismo: «Estamos mejor que hace un año y hoy les expreso una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy». Sin embargo, las negociaciones continuaron.

A partir de 2008, el Gobierno exhibe la detención de comandos de ETA como testimonio de su firmeza contra el terrorismo. Sin embargo, simultáneamente, pone en marcha una operación política, jurídica y mediática de gran envergadura que, como primera consecuencia, ha servido para blanquear a Batasuna. Ascendido a

vicepresidente primero, Rubalcaba se encarga de difundir el mensaje, desmentido por la documentación interna de los terroristas, de que los «halcones pistoleros» ya no controlan a las «palomas políticas». Al mismo tiempo, para contrarrestar las sospechas, impulsa una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que, según proclama, servirá para impedir cualquier «truco o artimaña» de Batasuna para colarse en las instituciones. La reforma, sin embargo, sólo sirve para justificar retrospectivamente la chapuza jurídica de ANV.

Llegada la campaña de las elecciones municipales y forales de 2011, el Gobierno no impide la utilización de Eusko Alkartasuna como pista de aterrizaje de Batasuna en las instituciones. En un característico doble juego, impulsa acciones jurídicas que luego contrarresta mediante presiones políticas. El encargado de formular esas presiones en público es el lehendakari Patxi López, que se convierte en el más enérgico defensor de la participación primero de Sortu y luego de Bildu en las elecciones. La operación culmina la noche del 5 de mayo de 2011. Tras recibir el voto favorable de los seis magistrados más cercanos al Gobierno y en una clara extralimitación de sus funciones, el Tribunal Consti-

tucional da vía libre a Bildu para concurrir a los comicios del 22 de mayo. El resultado es una victoria histórica de ETA. Sin un abandono previo de las armas, y con una condena genérica y en ningún caso retroactiva de la violencia, la coalición que, según el Tribunal Supremo, está «auspiciada por la misma ETA» y formada por los «testaferros de Batasuna», obtiene más de 310.000 votos y 1.138 concejales en el País Vasco y Navarra, se convierte en la primera fuerza política en Guipúzcoa y la segunda en Vizcaya, y tiene la opción de gobernar en decenas de ayuntamientos, incluido San Sebastián.

El regreso triunfal de ETA-Batasuna a las instituciones no sólo supone la legitimación social, histórica y política de la violencia que ha costado la vida a más de 850 personas en los últimos cincuenta años. También constituye el punto de partida de un nuevo desafío al Estado. El auge de un independentismo vasco radical con vocación hegemónica y un proyecto excluyente hace prever la puesta en marcha de una ofensiva sin precedentes contra el Estatuto de Guernica y el régimen constitucional vigente. Cuando eso ocurra, ni el celofán de la paz, ni siquiera un hipotético abandono de las armas, podrán ocultar la gravedad de la situación. Será la hora de las grandes decisio-

nes: o defender la España democrática con firmeza y claridad, o aceptar la victoria póstuma de un presidente que nunca imaginó que su tumba política la cavaría la economía.

Cinco millones de parados

MARZO DE 2007: «La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España».

SEPTIEMBRE DE 2007: «Se podría decir que la economía española ha entrado en la Champions' League de la economía mundial. Mal que les pese a algunos».

ENERO DE 2008: «La crisis es una falacia. Puro catastrofismo».

MARZO DE 2008: «Prometo crear dos millones de nuevos empleos».

ABRIL DE 2008: «La actitud de los que "exageran" la crisis es "antipatriótica, inaceptable y demagógica"».

SEPTIEMBRE DE 2010: «Superaremos a Francia en renta per cápita en tres o cuatro años. Eso no lo quiere oír mi amigo Sarkozy, pero es así».

Las hemerotecas suelen ser implacables, pero hay casos en que son invalidantes. Zapatero despreció los asuntos económicos hasta que ya fue demasiado tarde. Para él, la economía fue siempre un instru-

Los años y perjuicios de Zapatero

mento al servicio de la política. Dedicó los primeros cuatro años de su mandato a vivir de la herencia y de la inercia, y los siguientes dos a negar una crisis que ya hacía estragos en empresas y familias. En todo ese tiempo, no acometió ni una sola reforma. Se dedicó a provocar debates estériles y a despilfarrar el dinero público. El ritual anual de Rodiezmo, el cheque-bebé, los 400 euros, el Plan E con el que empapeló de vallas publicitarias todos los pueblos de España... La política económica de Zapatero ha consistido en ganar votos y perder tiempo a costa del interés general. El resultado ha sido la ruina de la economía española.

Lo analizarán los historiadores: ¿cómo pudo un Gobierno dilapidar una de las mejores herencias económicas del mundo en menos de dos legislaturas? Del equilibrio presupuestario de 2004 a un déficit del 11%. De una tasa de paro del 10% a una del 21%. De un desempleo juvenil del 22% a uno del 45%: la «generación perdida» sobre la que advierte el FMI. En apenas siete años, España deja de ser un ejemplo para el resto de Europa para convertirse en un problema para el resto de Europa. Ante el descalabro de las finanzas públicas españolas y la huida hacia delante de Zapatero, Bruselas lanza un ultimátum: reformas o intervención.

El 12 de mayo de 2010, tras recibir una llamada de Angela Merkel y otra de Barack Obama, Zapatero se sube a la tribuna del Congreso de los Diputados y pronuncia un discurso que supone no ya una rectificación integral de su política, sino una enmienda a la totalidad de sí mismo. Es su T4 económica: su atroz despertar, el abrupto final de sus ensoñaciones y engaños. Se acabaron el optimismo antropológico y el estratégico. Se acabaron las invocaciones huecas a la confianza en su liderazgo mesiánico. Se acabaron las promesas infundadas de un mañana mejor. Zapatero se ve obligado a reconocer que la economía española se hunde y que urge hacer ajustes drásticos.

Zapatero había construido su personaje político en torno a tres conceptos beatíficos que se retroalimentaban en contraposición al PP: el talante, la paz y los derechos sociales. A la estigmatización política del PP, se sumaba su estigmatización social: el PP privilegia a los empresarios y perjudica a los trabajadores; el PP es una amenaza para pensionistas y funcionarios; el PP se desentiende del drama de los dependientes; el PP es insensible a las necesidades de los jóvenes y las mujeres. El globo de la demagogia se pincha en Bruselas y colgada del hilo sólo queda la

sonrisa desfigurada de un presidente sin relato.

A partir del 12 de mayo de 2011, Zapatero se convierte en sinónimo no sólo de crisis económica y paro masivo, sino también del mayor recorte social de la democracia. En particular, de la congelación de las pensiones. Haciendo de la necesidad virtud, Zapatero hace un último esfuerzo para presentarse como un reformista, como un patriota dispuesto a inmolarsse por el interés general: «Voy a seguir el camino de las reformas cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste». Pero ya no es capaz de generar confianza. Ninguna de las iniciativas que promueve sirve para nada. Ni la Estrategia de la Economía Sostenible, ni los Pactos de Urbano, ni el Pacto Social y Económico, ni las seis reformas del sistema financiero, ni la ocurrencia de los 110 kilómetros por hora, ni la reforma laboral, aprobada por decreto ley en septiembre de 2010, sin el apoyo de los agentes sociales ni de los demás grupos parlamentarios.

Un año después de la epifanía económica del presidente, se constata el fracaso de una rectificación que llega con retraso y sin convicción: España alcanza la cifra récord de cinco millones de parados y sigue en riesgo de una intervención exterior.

El 2 de abril de 2011, en un ambiente eléctrico de expectación, Zapatero anuncia ante el Comité Federal del PSOE que no será candidato a las próximas elecciones generales. La noticia, recibida con alivio entre los candidatos socialistas a las elecciones municipales y autonómicas, no surte, sin embargo, el efecto deseado. El 22 de mayo, el PSOE sufre la mayor derrota electoral de su historia: diez puntos de diferencia con el PP y la pérdida de prácticamente todo su poder autonómico y local.

El proyecto de Zapatero ha tenido un efecto bumerán: en el intento de destruir al PP, ha destrozado al PSOE. Bajo los escombros de Ferraz, ni siquiera subsiste ya el ánimo de perpetuar la ficción de la superioridad democrática de la izquierda: la promesa de unas primarias abiertas y limpias acaba en un dedazo que unge, como nuevo líder, al estratega en la sombra y gran confabulador. Un hombre incompatible con la regeneración. No sólo porque enlaza los episodios más oscuros del 'felipismo' y el 'zapaterismo', de los GAL al Faisán, sino por su manera de entender la política como el arte de la disimulación y la mentira, y el poder como un fin en sí mismo. Lo veremos a lo largo de los próximos meses: Rubalcaba utilizará todos los recursos a su alcance, sin

Los años y perjuicios de Zapatero

reservas éticas o democráticas, para impedir que el PP obtenga la mayoría necesaria para formar un Gobierno fuerte, estable y eficaz.

Este es el legado que nos deja Zapatero: una crisis económica, política e institucional de primera magnitud, que no se resolverá de manera automática con un cambio en el Gobierno. El cambio es condición necesaria, pero no suficiente, para que España salga adelante. El desempleo, el déficit y la desconfianza; el descrédito exterior, la debilidad del Estado y el triunfo de ETA: la factura de Zapatero es inmensa, e inmensos tendrán que ser el coraje y la fortaleza del próximo Gobierno. España necesita un gran proyecto de regeneración, recuperación y reforma. Hay que regenerar la democracia y sus instituciones. Hay

que restaurar el valor de la verdad y la primacía de la Ley. Hay que liderar un nuevo impulso reformista para volver a la senda del bienestar. Hay que reconstruir los consensos básicos y apostar, más que nunca, por objetivos y ambiciones comunes. En definitiva, hay que recuperar la idea del Gobierno como un instrumento noble y eficaz al servicio del bien común, y jamás de un proyecto sectario de poder hegemónico, exclusión política o división social. No será fácil, pero es imprescindible. Si lo hacemos, los años y perjuicios de Zapatero pasarán a la historia, éstos sí, como un lamentable paréntesis en la extraordinaria trayectoria de libertad, convivencia y prosperidad que comienza en la Transición y que puede hacer de España una de las mejores democracias del mundo. ■